



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Mar del Plata, 24 de septiembre de 2025

VISTO:

El caso **FMP 15677/2022/1/CA1**, caratulado "Legajo de apelación de Felice Hermanos SRL por infracción a la ley 24.730", del registro de la Secretaría Penal de esta Cámara Federal de Apelaciones, elevado por el Juzgado Federal 1 de Azul;

Y CONSIDERANDO:

El doctor Eduardo Pablo Jiménez:

Que llegan las presentes actuaciones a conocimiento del suscripto en razón del recurso de apelación en subsidio interpuesto por la defensa técnica de la firma "Felice Hnos. SRL", respecto de la resolución del 26/02/2025, mediante la cual —en lo que al presente interesa— se declaró extinguida la acción penal por la presunta evasión del impuesto a las ganancias, período 2018, conforme lo dispuesto por el art. 16 de la ley 27.430 y, consecuentemente, decretó el sobreseimiento de su socio gerente Pedro César Felice.

Los hechos. La resolución recurrida.

En la presente se investiga a la firma referida y a sus miembros, Pedro César Felice (en su calidad de gerente titular) y Analía Valentina Felice (socia), el haber evadido mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas del impuesto a las ganancias, período 2018, por un monto de \$2.250.282,40; conducta subsumida en el art. 1º contenido en el art. 279 de la ley 27.430.

La instrucción fue delegada a la Fiscalía Federal de Tandil en virtud del art. 196 CPPN quien, oportunamente, solicitó al Fisco nacional que informara si la contribuyente se encontraba acogida a un plan de facilidades de pagos, haciéndose saber que la contribuyente había presentado tres compensaciones en fecha 1/08/2022 y un plan de pago N° Q708957 el 5/8/2022, solicitando un plan de 20 cuotas.



#39842771#472849641#20250924102204494

En función de ello, la defensa solicitó la suspensión de la causa penal en virtud del plan de pagos suscripto. Cursada la vista correspondiente a la Fiscalía interviniente, contestó haciendo alusión a la anterioridad del acuerdo respecto a la radicación de la denuncia que efectuara el ente contribuyente y previó la posibilidad de evaluar la situación en virtud del art. 59 del Código Penal, para orientar la resolución del conflicto.

Seguidamente, el fisco informó que el plan de pagos se dio bajo el Régimen General AFIP N° 4268 que no prevé los beneficios excepcionales de suspensión ni de extinción de la acción penal y que a su vez se oponía a la aplicación del instituto de art. 59 del Código Penal.

Finalmente, el Juzgado Federal dispuso la suspensión del trámite de la causa, conforme el artículo 16 de la Ley 27.430 y el artículo 59 inc. 6 del Código Penal y, habiéndose constatado el pago total de la deuda, la Fiscalía postuló la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de los imputados en el marco de las previsiones establecidas en el artículo 59 inc. 6 CP y el art. 16 de la ley 27.430, mientras que la Defensa, disconforme con ello, solicitó la extinción de la causa en virtud de lo previsto en el art. 5 Ley 27.743, planteo que fue descartado por la ARCA.

Consecuentemente, el 26/02/2025 el juzgado resolvió declarar la extinción de la acción penal conforme lo dispuesto por el art. 16 de la ley 27.430 y decretó el consecuente sobreseimiento, lo cual fue cuestionado por la defensa a través de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, lo cual derivó en la formación del presente legajo de apelación.

Los agravios de la parte recurrente.

Se agravia la defensa por cuanto considera que el magistrado al comparar las sucesivas leyes que vienen a regir el conflicto penal, interpreta de manera equivocada que en la Ley 27.743 excluye de los beneficios penales de extinción de la acción, a las deudas que hayan sido canceladas previamente a su sanción a través





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

de compensaciones, lo cual considera que no es así, porque la norma del art. 5 de dicha Ley es clara cuando regula lo concerniente al caso de autos, puesto que refiere a la forma de pago de obligaciones que se pretenden adherir al presente régimen, donde no se permite regularizar y gozar de beneficios a través de la compensación.

En el caso de autos, explica, no se adhirió a dicha Ley en el sentido que no quedaban obligaciones por regularizar en dicha moratoria, pero sí resultaba aplicable al párrafo citado en cuanto quedaba extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hubieran sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del régimen actual y en la medida que no existiera sentencia firme a dicha fecha, siendo una norma posterior más benigna, lo que implica no utilizar el beneficio del art. 16 de la Ley 27.430, que puede ser utilizado por una única vez por contribuyente.

La aplicación de aquella es de pleno derecho en el caso de aquellas obligaciones canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia y en la medida que no existiera sentencia firme.

Además, cuando la ley tributaria habla de cancelaciones de impuestos, refiere específicamente al término genérico para que no haya dudas que se trata de “pago”, “compensación” o cualquier otro modo aceptado por la norma de la Ley 11.683 y específicas de la materia. Por tanto, al momento de plantear la aplicación de la Ley 27.743, no existen dudas que se trataba de una ley más benigna porque decreta la extinción del proceso penal, sin utilizar la “bala de plata” que por única vez establece la norma del art. 16 de la LPT.

La réplica formulada por el Ministerio Público Fiscal.

Sostiene el Fiscal General que la resolución impugnada debe ser confirmada en lo que a la extinción de la acción penal respecta, pero no por los agravios esgrimidos por la defensa, ello por cuanto advierte que el acogimiento al plan de pago en cuotas acordado por la Administración con anterioridad a la radicación de la



denuncia hizo que, con el devenir de la investigación, la defensa solicitara la suspensión de la causa, ya que se encontraban bajo un plan acordado con el ente recaudador. En virtud de ello, el Ministerio Público Fiscal entendió que resultaba viable la posibilidad de evaluar la vía prevista por el art. 59 del Código Penal.

Al momento de resolver, el Juzgado dejó abierta esta posibilidad y decretó la suspensión del trámite de la causa conforme el art. 16 de la ley 27.430 y el art. 59 inciso 6 del CP.

Un año después, el 24/06/2024, la defensa presentó la documentación que acreditaba la cancelación total del plan de pago en sus 20 cuotas pactadas, y al momento de solicitar su extinción, trajo a colación la ley 27.743 que creó el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social con el fin de lograr un pago voluntario de los contribuyentes. Sin perjuicio de tal invocación, el juez aquo extinguió la acción penal en los términos del artículo 16 de la ley 27.430, sin hacer mención al artículo 59 del Código Penal en el que se había respaldado anteriormente para suspender la acción penal, y negando la aplicación de la ley 27.743 en virtud de la normativa vigente al momento del hecho investigado (ley 27.430).

Además, el Fiscal General coincide con el a quo en la no exclusión del art. 59 inc. 6 del C.P. por la vigencia del beneficio previsto en el art. 16 de la ley 27.430 en materia tributaria, señalando que el hecho concreto presenta ciertos puntos de necesaria atención, entre ellos el que radica en el acogimiento a un plan de pagos por parte de la contribuyente, que excluye en la actualidad la posibilidad de requerirle a la firma una reparación integral que exceda lo acordado, en aras de mantener el respeto y la confianza en lo pautado y, además, que al día de la fecha dicho plan de pago fue cumplido en su totalidad, existiendo una nueva ley que permite mejorar la situación de la firma imputada.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

Dicha ley fue promulgada el 5/7/2024 y publicada en el Boletín Oficial en fecha 08/07/2024 y si bien advierte la posterioridad de su promulgación a los hechos aquí investigados, remarca que no puede soslayarse el principio de la ley penal más benigna.

Culmina reflexionando que no se discute aquí la extinción de la acción penal sino su fundamento, y teniendo en consideración que ARCA no se presentó en autos como parte querellante y que en respuesta a la última vista conferida, solicitó se considerara la posibilidad de hacer uso del beneficio de extinción de la acción penal previsto en el art. 5 de la ley 27.743, el Fiscal consideró que podía hacerse lugar a lo solicitado por la Defensa.

La opinión del suscripto.

Analizada la resolución cuestionada, los agravios blandidos por la parte recurrente y la réplica formulada por el Fiscal General, entiende que debe hacerse lugar a la solicitud de la defensa, pues en primer término, tengo presente que el Régimen Penal Tributario comporta una normativa especial, que contempla una regulación específica respecto de la extinción de la acción penal por pago establecida en el art. 16 contenido en el art. 279 de la Ley 27.430, además de aquellas leyes especiales que se dicten al respecto (como por ejemplo ha sucedido con la Ley 26.680; 27.260; 27.541 -modificada por la ley 27.562-; 27.653, la propia 27.743, etc.), lo cual tornaría operativo el principio "*lex specialis derogat lex generalis*", desplazando en consecuencia al instituto de la reparación integral contemplado en el art. 59 inc. 6º del Código de fondo, y 34 del Código Procesal Penal Federal, en cuanto contempla el instituto de la conciliación, criterio ya sostenido por este Tribunal en anteriores oportunidades (ver al respecto CFAMDP, sentencia interlocutoria registrada bajo el n° 270/2014/58/CA38 del 01/09/2022).

Esta senda argumentativa no resulta aislada, ya que encuentra respaldo en jurisprudencia especializada, por cuanto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo



#39842771#472849641#20250924102204494

Penal Económico tiene dicho que “...no es posible alcanzar los efectos propios de la norma contenida en el Art. 59, inc. 6, del Código Penal, pues estos han sido previstos por el legislador especialmente para los delitos del Régimen Penal Tributario, desplazando, por especialidad y oposición, las previsiones del Código Penal citadas, por aplicación de la previsión expresa del Art. 4...” (CNAPEcon., Sala B, autos: “A. S. S.A.”, del 18/12/19 CPE 1604/2017/2/CA2, Reg. 987/2019).

En similar sentido se rechazó el planteo de extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio, pues al “...momento de dictarse la Ley 27147 (que incorporara el inc. 6, del Art. 59 del CP, estableciendo una forma nueva de extinción de la acción penal), se encontraba vigente el Art. 16 de la Ley 24769, el cual no fue derogado por el legislador, por lo que, en materia de los delitos de la ley penal tributaria, aquél pretendió mantener un régimen especial diferente al del Código Penal. Caso contrario, le hubiese bastado con suprimir la norma diferenciadora especial para dar lugar a la aplicación de las disposiciones generales sobre la extinción de la acción penal, lo cual tampoco ocurrió con el Régimen Penal Tributario de la Ley 27430, dictada con posterioridad a la incorporación del inc. 6) del Art. 59 del CP...” (CNAPEcon., Sala B; Autos: G. A. S.A. - M. L., C., CPE 1826/2016/1/CA2., del 3/05/19, Reg. 282/2019).

Que este temperamento en nada afecta el principio de igualdad ante la ley, pues conforme tiene dicho la Corte Suprema de Justicia nacional, el principio de la igualdad ante la ley consiste en el derecho de todos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos: 320:2145), pues es menester que la desigualdad resulte del texto mismo de la ley aplicada, y no de la interpretación que le haya dado la autoridad encargada de hacerla cumplir (Fallos: 304:710).

De sostenerse la posibilidad de aplicar el mentado criterio de oportunidad a delitos tributarios, implicaría habilitar a la comisión de cualquier delito de tal





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

naturaleza (tributario o previsional), ya que bastaría “...con tener la plata suficiente para satisfacer la pretensión fiscal o de la seguridad social cuando se den cuenta los órganos de contralor y persecución estatales y formen una causa: entonces se podrá pagar (reparar) y cerrarla. Extremado, este criterio importa sostener que cualquier delito podría conciliarse/repararse y provocar el mismo resultado. Realmente no hay elementos que surjan de la discusión parlamentaria ni doctrina o jurisprudencia de cierta extensión y consistencia que habilite tal conclusión...” (Riquert, Marcelo A.; “Régimen Penal Tributario y Previsional”, 2da edición, Hammurabi, pág. 443).

Asimismo, la opinión del Fisco en su carácter de damnificado en el presente proceso penal, cobra relevancia al momento de evaluar la aplicación del instituto en cuestión. En efecto, tengo presente las facultades conferidas por el art. 79 del Ritual y la Ley 27.732 al Organismo recaudador y la Disposición 48/2022 dictada por la entonces AFIP (BO 30/03/2022), en cuanto establece en su artículo 1° que la representación del Fisco a los fines previstos en los artículos 34 y 80 del Código Procesal Penal Federal y en el inciso 6) del artículo 59 y el artículo 76 bis del Código Penal y en cualquier otro supuesto que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, se le dé intervención en tal carácter será ejercida, dentro de las respectivas jurisdicciones, por los funcionarios a cargo de las dependencias que se indican en el Anexo contenido en la misma.

En función de ello y de lo manifestado por la representante legal del organismo fiscal en su presentación de fecha 04/04/2023, en cuanto se opone a la aplicación de la reparación integral normada en el art. 59 inc. 6° del CP, por aplicación del principio de especialidad, no hacen más que robustecer la postura prohijada, por lo cual considero oportuno aclarar tal punto.

En segundo lugar, en virtud del reclamo de la parte recurrente relativo a la aplicación del art. 5 Ley 27.743 sobre “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”



(BO 08/07/2024), es dable recordar a la solicitante que el artículo 1° de dicha ley prevé la posibilidad que los contribuyentes y responsables se acojan al régimen en cuestión, obteniendo los distintos beneficios según la modalidad de la adhesión y el tipo de deuda que registren. Ello respecto de las obligaciones vencidas al 31/03/2024, inclusive, y por las infracciones cometidas hasta dicha fecha relacionadas o no con aquellas obligaciones (art. 2°).

Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 2° de la normativa determina que el acogimiento “...podrá formularse desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta transcurrido ciento cincuenta (150) días corridos desde aquella fecha, inclusive...”.

Por su parte el artículo 5° de la referida Ley establece en su tercer párrafo que “...También quedará extinguida de pleno derecho la acción penal respecto de aquellas obligaciones que hayan sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen en la medida que no exista sentencia firme a dicha fecha...”, quedando dispensado el Fisco de formular denuncia penal cuando las obligaciones principales hubieran sido canceladas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente régimen.

Por otro lado, el artículo 6° establece con alcance general, para los sujetos que se acojan al presente régimen, las condiciones y beneficios, según la fecha de adhesión y la forma de pago elegida, sin perjuicio que deberá verificarse —en cada caso— si se encuentran alcanzados por alguna de las causales de exclusión establecidas en el artículo 4 de la misma (ver at. 7° último párrafo).

A su vez, es dable destacar que dicha Ley, en cuanto al presente interesa, ha sido reglamentada por el Decreto 608/2024 y por la Resolución General 5525/2024 (BO 16/07/2024).

En tal sentido, sin perjuicio la manifiesta intención de la contribuyente de acogerse a dicho régimen en el marco de la presente causa, lo cierto es que, a todo





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

evento, la adhesión debe hacerse conforme las condiciones que la Administración estableció al momento de reglamentar la referida normativa y no en el marco de la presente instrucción.

Es decir, deberán cumplir las disposiciones y los requisitos que se establecen en la RG 5525/2024, cuestión que no ha ocurrido en autos, pues, la hermenéutica que debe darse a la disposición contenida en el tercer párrafo del artículo 5 de la Ley 27.743, en cuanto establece la extinción de la acción penal de “pleno derecho”, lo es en el sentido que, previamente, debe de haber manifestado ante el Organismo recaudador la voluntad de adherirse al Régimen de Regularización, cumpliendo las formalidades y requisitos del caso. Es decir, la extinción operará de pleno derecho, pero una vez que se haya adherido a la ley en cuestión y siempre en las condiciones previstas en el mismo.

Por otro lado, si bien no estaba en vigencia el régimen que demanda su aplicación, de hecho, la defensa oportunamente solicitó la suspensión de la acción penal por aplicación del artículo 59 inciso 6º, a lo cual accedió el juez instructor hasta la finalización del plan de pagos N° Q708957 y sin perjuicio de que la Ley 27.743 podría resultar más benigna, lo cierto es que la contribuyente demandó su aplicación en el marco de las presentes actuaciones y no ante la AFIP (hoy ARCA), por lo cual no ha cumplido con la normativa vigente y su reglamentación.

Asimismo, no escapa al suscripto que el Fisco en su presentación de fecha 13/12/2024, no se opuso a la aplicación de la Ley en cuestión, pues su representante legal entendió propicio considerar la posibilidad de su aplicación, lo cierto es que no meritó si correspondía o no que la contribuyente hiciera uso del beneficio de extinción de la acción penal en virtud del art. 5 Ley 27.743, además de hacer saber que se encuentra vigente el derecho a utilizar el beneficio previsto en el artículo 16º primer párrafo del Régimen Penal Tributario aprobado por la ley 27.430.



#39842771#472849641#20250924102204494

En definitiva, considero que las disposiciones de la Ley 27.743 tampoco resultan aplicables de pleno derecho, sino que debe efectuarse ante el organismo fiscal —facultado para reglamentar dicho régimen y dictar las normas complementarias— una manifestación de voluntad de adherirse a sus beneficios, conforme la normativa y reglamentación aplicables (arg. Artículo 1º de la RG 5525/2024), por lo cual entiendo que no puede prosperar el recurso impetrado, en cuanto demanda la aplicación de dicha normativa, debiendo tenerse por extinguida la acción penal conforme las prescripciones del artículo 16 contenido en el artículo 279 de la Ley 27.430.

Tal el sentido de mi voto.

El doctor Alejandro Osvaldo Tazza:

Expuestas por mi distinguido colega las circunstancias de hecho y de derecho que fundamentan su decisión, comparto los argumentos vertidos, a los cuales me remito en honor a la brevedad, por considerar que constituyen un desarrollo adecuado y suficiente de las normas aplicables al caso.

En efecto, el análisis efectuado por mi colega resulta razonable en cuanto a la interpretación de las normas que rigen el tópico en discusión, por lo que no encuentro razones para apartarme de dicha postura.

En consecuencia, adhiero a su voto en lo sustancial, dando por reproducidos sus fundamentos como propios.

Tal es mi voto.

En virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal **RESUELVE:**





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE MAR DEL PLATA

NO HACER LUGAR al recurso de apelación y **CONFIRMAR** la sentencia del 26 de febrero del corriente en cuanto declaró extinguida la acción penal por la presunta evasión del impuesto a las ganancias (2018) y ordenó el sobreseimiento de Pedro César Felice.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE.



#39842771#472849641#20250924102204494